



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación
SALA REGIONAL
GUADALAJARA

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JRC-420/2024

PARTE ACTORA: PARTIDO
POLÍTICO HAGAMOS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADA PONENTE:
GABRIELA DEL VALLE PÉREZ

**SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA:** FERNANDO ARBALLO
FLORES¹

Guadalajara, Jalisco, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve **confirmar** la resolución emitida en el expediente **JIN-90/2024 y acumulados** por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en la que se confirmó el cómputo municipal de la elección de munícipes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Palabras clave: *error, dolo, cómputo de votos, situación extraordinaria.*

ANTECEDENTES

Del escrito de demanda y de las constancias que integran el expediente, se advierte:

1. Jornada electoral. El dos de junio, se llevó a cabo en el estado de Jalisco la jornada electoral para la elección de gubernatura del Estado, diputaciones y munícipes por ambos

¹ En colaboración con **Ana Karla González Lobo.**

principios.

2. Cómputo Municipal. El cinco de junio, el Consejo Municipal inició el cómputo de la elección de munícipes el cual culminó el día ocho de junio.

3. Declaración de validez. El nueve de junio el Consejo General del Instituto Electoral emitió el acuerdo mediante el cual, entre otras cosas, calificó y declaró la validez de la elección municipal.²

4. Juicio de inconformidad local. En contra de lo anterior, el partido político estatal **Hagamos** presentó demanda de juicio de inconformidad ante el Tribunal local registrada con la clave de expediente **JIN-90/2021 y acumulados** y, mediante resolución de ocho de septiembre, se determinó **improcedente** el incidente sobre la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla.

Posteriormente, mediante sentencia de nueve de septiembre siguiente, se confirmaron en lo que fueron materia de impugnación, los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección municipal.

5. Juicio de revisión constitucional electoral. En desacuerdo con la confirmación de los resultados, el catorce de septiembre posterior el partido actor presentó ante la responsable la demanda del juicio de revisión constitucional electoral que ahora nos ocupa.

6. Recepción y turno. Recibido el medio de impugnación en esta Sala, el Magistrado Presidente ordenó registrar la demanda

² Consultable en el siguiente link:
<https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-06-09/341iepc-acg-237-2024041-guadalajara.pdf>



con la clave del expediente **SG-JRC-420/2024** y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Gabriela del Valle Pérez.

7. Sustanciación. En su oportunidad, mediante diversos acuerdos se radicó el juicio, se admitió la demanda y se declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional Guadalajara es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, dado que se trata de un juicio interpuesto por un partido político contra una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que confirmó los resultados de la elección a municipales un ayuntamiento de Jalisco, supuesto y entidad federativa en la que esta Sala tiene competencia y ejerce jurisdicción.

Con fundamento en:

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:** artículos 41, Base VI, 94, párrafo primero y 99, párrafo cuarto, fracciones IV y V.
- **Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:** artículos 1, fracción II; 164; 165; 166, fracción III, inciso b); 173; 176, fracciones III y IV y 180.
- **Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:** artículos 3, párrafo 2, inciso d), 86; 87, párrafo 1, inciso b); 88, 89, 90 y 91.
- **Acuerdo INE/CG130/2023:** Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el ámbito

territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

- **Acuerdo 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.
- **Acuerdo 2/2023 de la Sala Superior** por el que se regulan las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. En el juicio en estudio, se cumplen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7; 8; 9, párrafo 1, 86, párrafo 1, 88 párrafo 1, inciso b), de la ley de medios de impugnación en materia electoral, como enseguida se explica.

a. Forma. Se encuentra satisfecho, ya que la demanda se presentó por escrito, se hace constar nombre y firma autógrafa de la parte promovente, se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; asimismo, se exponen hechos y agravios que en opinión de la parte actora le causan perjuicio, así como los preceptos legales presuntamente violados.

b. Oportunidad. Se cumple con este requisito, toda vez que la de las constancias que integran el expediente se advierte que la resolución impugnada se notificó por estrados el diez de septiembre del presente año y la demanda se interpuso el catorce siguiente, es decir, dentro del plazo de cuatro días previsto en la Ley de Medios.



c. Legitimación y personería. Se cumplen estos requisitos porque el juicio es promovido por un partido político, y Ernesto Rafael Gutiérrez Guízar tiene acreditada su personería, toda vez que fue quien interpuso el juicio local al cual le recayó la resolución impugnada; lo que está reconocido en por la responsable en su informe circunstanciado.

d. Interés jurídico. El requisito se cumple, pues el partido actor estima que la sentencia impugnada indebidamente confirmó los resultados de la elección municipal cuestionada, además de haber sido parte actora ante la instancia local.

e. Definitividad y firmeza. El requisito en cuestión se considera colmado, en virtud de que la ley de medios de impugnación en materia electoral no prevé algún otro recurso o juicio que deba ser agotado previamente a la tramitación del presente medio de impugnación.

Requisitos especiales de procedibilidad. Se tienen por satisfechos como a continuación se precisa.³

f. Violación a un precepto constitucional. El partido promovente precisa que se vulneran los artículos 17, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se actualice la irregularidad, la exigencia es de carácter formal y por tal motivo, la determinación repercute en el fondo del asunto, por lo que se tiene por satisfecho el requisito en estudio.

g. Carácter determinante⁴. Se colma tal exigencia, toda vez que, la sentencia impugnada está relacionada con el cómputo

³ Los requisitos establecidos en los artículos 86 y 88 de la ley de medios de impugnación en materia electoral.

⁴ Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia número 15/2002, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con rubro: "VIOLACIÓN

municipal de la elección de munícipes en Jalisco, razón por la cual el partido **Hagamos** tiene como pretensión que se revoque la sentencia impugnada, a fin de que se modifique la votación recibida en ciertas casillas, con el objeto de alcanzar el porcentaje de votación mínimo requerido –tres por ciento—, para mantener su registro como partido político local⁵.

Lo cual, justifica la procedencia del presente juicio de revisión constitucional electoral, pues ha sido criterio de este Tribunal electoral que la variación del porcentaje de votación de un partido político necesario para conservar su registro, debe ser objeto de estudio al momento de analizar el requisito de determinancia del juicio de revisión constitucional electoral⁶.

h. Reparabilidad material y jurídica. De resultar fundada la pretensión del partido actor, existe la posibilidad jurídica y material de revocar o modificar la resolución controvertida⁷.

Al estar colmados los requisitos de procedibilidad y ante la inexistencia de causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede a abordar el análisis de la cuestión planteada.

TERCERA. Estudio de fondo. De manera previa al pronunciamiento de la determinación de esta Sala Regional, se precisará la pretensión de la parte actora, se hará una breve

DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO”.

⁵ Tesis L/2002. DETERMINANCIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO NECESARIO PARA CONSERVAR SU REGISTRO, DEBE SER OBJETO DE ESTUDIO AL MOMENTO DE ANALIZAR ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 123 y 124.

⁶ Similar criterio adoptó esta Sala en los juicios SG-JRC-155/2021 y acumulado, SG-JRC-180/2021 y SG-JRC-251/2024.

⁷ Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1/98 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “REPARABILIDAD, COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. DEBE DETERMINARSE EN FUNCIÓN DEL MOMENTO EN QUE SURJA LA SENTENCIA Y NO SOBRE LA BASE DE ALGÚN OTRO ACTO PROCESAL Consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, página 656.



reseña de la cadena impugnativa, así como un resumen de los agravios expuestos en la demanda.

Pretensión de la parte actora. La pretensión es conservar el registro como partido político local, toda vez que, desde su óptica, en la votación consignada en cada una de las casillas impugnadas se actualizó un error en el cómputo y la determinancia en el resultado de la votación.

Lo anterior, porque se actualizaron errores en el cómputo de votos de la coalición de la cual **Hagamos** formó parte, al haberse asignado todos a favor de **Morena** lo que considera es determinante para que el partido actor alcance el 3% de la votación necesaria para conservar su registro. Dichas irregularidades no fueron subsanadas en sede administrativa.

Contexto del asunto

La parte actora planteó ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que debían anularse diversas casillas porque en la sección de votos válidos se consignó para **Hagamos** 0 cero votos, lo que significa que sus votos se asignaron a un solo partido integrante de la coalición en perjuicio de **Hagamos**.

Por lo que solicitó a la responsable una interpretación flexible de del artículo 636, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral Local para que se anularan dichas casillas con la finalidad de garantizar el principio de autenticidad del sufragio.

Resolución impugnada

El tribunal responsable, luego de hacer un marco normativo en torno a la causal de nulidad de error o dolo en el cómputo de los votos, invocada por la parte actora, declaró inoperantes los

agravios porque el partido político actor incumplió con la carga de la prueba, pues no ofreció prueba alguna para acreditar su dicho consistente en que no se respetó el sentido del voto porque la votación de los electores se distribuyó o traspasó a otro instituto político, pues con el material probatorio aportado no se pudo corroborar que se hubiera cometido dicha irregularidad.

Síntesis de agravios

1. Indebida valoración de las pruebas y la causal de nulidad expuesta, derivado de la omisión de aplicar un estándar flexible ante una circunstancia extraordinaria.

- Sostiene que las actas de las casillas impugnadas eran indicio suficiente para acreditar la violación señalada por el partido (de las actas se deprendían los 0 ceros y todos los votos de la coalición a favor de **Morena**), porque no hay otro medio de prueba con el cual se acredite la distribución o transferencia de votos válidos en la coalición hacia **Morena**.
- El tribunal debía flexibilizar la carga o el estándar probatorio de acuerdo con la tesis de la prueba de contexto.
- Considera que lo solicitado por el tribunal responsable es una exigencia irracional y fuera de proporción, ya que, si bien el planteamiento no tiene los elementos típicos, sí se trata de una situación extraordinaria que la responsable desestimó sin una base objetiva y sí es determinante para que el partido conserve su registro. Ello, porque el error aducido en las actas de escrutinio y cómputo por sí solo actualizaba la causal de nulidad.
- Afirma que la responsable no aporta razones por lo cual la norma no pueda ser interpretada conforme a garantizar los derechos humanos como se solicitó en la demanda, pues



existe la posibilidad de afectar la votación mediante otras formas de error en el cómputo, además de lo previsto en la ley.

2. Vulneración al artículo 41, base VI, tercer párrafo, de la Constitución al aplicar el artículo 636 del Código Electoral Local y dejar en estado de indefensión a Hagamos.

- La resolución contraviene los artículos 17 y 35 de la Constitución Federal porque la norma prevé hipótesis ordinarias, pero los juzgadores, al ver que no se actualizaba error en los rubros fundamentales, debieron haber aplicado el artículo 544 del Código Electoral Local, y suplir la deficiencia en la expresión de los agravios.
- El tribunal no concedió la apertura de un nuevo escrutinio y cómputo, por lo que los errores subsisten y deben anularse las casillas.

Tenía que eliminar las barreras que imposibilitaran a **Hagamos** tener un verdadero acceso a la justicia y considerar que el sistema de nulidades está en constante evolución, como lo ha sostenido la Sala Superior, por lo que solicita:

- Se declare procedente un nuevo escrutinio y cómputo.
- La nulidad de las casillas porque los errores graves ponen en duda la votación del 2 de junio.

3. La aplicación indebida de la causal de nulidad invocada, al excluir la votación de un sector importante de la población del municipio.

- La sentencia contraviene los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal porque a juicio del tribunal local no se

acreditó la existencia de error grave o dolo en el cómputo de los votos que altere sustancialmente el resultado de la votación.

- Se vulneraron los principios de certeza y autenticidad porque las boletas preveían diferentes formas de votación en favor de la coalición **Sigamos Haciendo Historia en Jalisco**, y en el acta de escrutinio y cómputo se sumaron únicamente para el partido **Morena** y en ceros 00 para **Hagamos**.
- La decisión de confirmar el cómputo del municipio cuya votación se encuentra cuestionado y aplicar de manera rígida la causal de nulidad solicitada compromete los derechos a votar, ser votado y asociación previstos en la propia Constitución.
- Insiste en que la Corte ha sostenido que las leyes prevén situaciones ordinarias pero los tribunales deben interpretarlas a fin de que se apliquen los principios rectores de la materia electoral.
- Señala que el código de la materia establece que un voto será válido cuando el elector marque dos o más recuadros cuando se trate de partidos coaligados, pero en el caso, irregularmente se consideró 0 cero para el partido **Hagamos**, por lo que es ahí donde se encuentra la irregularidad de error o dolo en el cómputo de los votos.

Lo anterior no se traduce en saber quién resultó vencedor en la contienda sino en saber exactamente cuántos votos obtuvo **Hagamos**, quien se encuentra en riesgo de perder su registro.

4. La vulneración al derecho del debido proceso y cumplimiento de las garantías de acceso a la justicia.



- La sentencia declara infundados e inoperantes el agravio relativo a la vulneración de la cadena de custodia respecto de 125 casillas de la elección municipal de Guadalajara, por lo que vulnera el derecho al debido proceso y las garantías de acceso a la justicia.
- Señala que el Instituto Electoral local se encontraba vinculado a remitir al Tribunal local toda la documentación relacionada con el acto impugnado para que del análisis de la misma, el Tribunal responsable pudiera concluir si se vulneró o no la cadena de custodia.

Metodología de estudio. Dado que en los agravios reseñados se advierten elementos comunes se estudiarán, en primer término y de manera conjunta, aquéllos en los que aduce que el tribunal analizó la situación extraordinaria planteada con hipótesis normativas ordinarias así como la valoración y flexibilización del estándar probatorio de las actas ofrecidas; en segundo término, los relativos a la pretensión de ordenar un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas cuestionadas, con la finalidad de conocer con exactitud los votos que fueron emitidos a favor del partido político **Hagamos** y la pretensión de nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas.

Lo anterior en virtud de que lo medular es que sean estudiados todos los motivos de disenso y el orden en que fueron planteados.⁸

Agravios relacionados con la solicitud de estudiar, bajo una hipótesis extraordinaria (no prevista en la ley), la nulidad de casillas cuestionadas, así como la indebida valoración de las pruebas

⁸ Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.

Respuesta.

Los agravios devienen **inoperantes e infundados**, como se explica a continuación.

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el que los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan: el número de electores que votó en la casilla; el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; el número de votos nulos; y el número de boletas sobrantes de cada elección, lo anterior con fundamento en el artículo 288, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el caso de las coaliciones, el artículo 311 de la invocada legislación establece que se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

Por su parte, el Código Electoral del Estado de Jalisco prevé un sistema de nulidad de casilla para que, en caso de que se acrediten las hipótesis previstas en su artículo 636, la votación recibida en alguna de las casillas instaladas en una demarcación territorial y que sean impugnadas mediante un juicio de inconformidad pueda ser descontada del resultado total del municipio, distrito o entidad que se trate.

La fracción III del artículo 636 del Código Electoral Local prevé como causa de nulidad de casilla que hubiese mediado error



grave o dolo manifiesto en el cómputo de votos que altere sustancialmente el resultado de la votación, por lo que deben acreditarse plenamente los siguientes elementos:

- a. Que haya mediado error grave o dolo manifiesto en la computación de los votos; y,
- b. Que altere sustancialmente el resultado de la votación (determinante).

Únicamente al acreditarse ambos elementos se actualizaría la hipótesis de nulidad.

Ahora bien, el artículo 523, párrafo 2, del Código Electoral Local establece que el que afirma está obligado a probar, por lo que, llevado al plano de nulidad de casillas, se traduce en la exigencia de cumplir con la carga procesal de la afirmación, es decir, con la mención particularizada de las casillas cuya votación solicite se anule, la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, así como los hechos que la motivan y el caudal probatorio necesario para acreditarlo.

En el caso que nos ocupa, el partido actor sostiene que planteó ante la responsable una situación extraordinaria por la cual solicitó la nulidad de diversas casillas, bajo la causal de error o dolo en el cómputo de los votos, consistente en que la votación que obtuvo el partido **Hagamos**, no se vio reflejado en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, toda vez que éstos fueron transferidos indebidamente al partido **Morena**, también integrante de la Coalición de la que formó parte.

El planteamiento reseñado, no se encuentra previsto en la ley como causa de nulidad de casilla, sin embargo, el partido solicitó una flexibilización en el estudio del juicio a fin de las casillas

impugnadas fueran anuladas con la finalidad de conservar su registro.

Sin embargo, lo inoperante se actualiza toda vez que esta Sala advierte que la base de su pretensión se centra en una premisa que no se encuentra acreditada, pues se trata de una apreciación subjetiva y carente de sustento; es decir, el partido actor no aporta siquiera un leve indicio de que indebidamente se hayan computado votos en favor de un solo partido integrante de la coalición que conformó y, por ello en las actas materia de la controversia aparece el partido **Hagamos** con 0 cero votos.⁹

En efecto, para pretender acreditar su dicho, la parte actora ofreció ante la instancia local la copia de cada una de las actas de escrutinio y cómputo cuya nulidad se alega, de las cuales, afirma, se puede desprender que el apartado para consignar el resultado de la votación obtenida por **Hagamos**, se encuentra en 0 cero.

Sin embargo, las documentales referidas no fueron suficientes para que la irregularidad alegada quedara acreditada, pues de dichas actas únicamente se desprende los resultados que los funcionarios de casilla plasmaron en cada una de las opciones políticas, pero de ninguna manera, que la votación recibida para el partido **Hagamos** fue registrada a favor de otro partido político.

A manera de ejemplo, entre otras posibilidades, para tener por acreditada dicha situación, el partido actor hubiera podido ofrecer escritos de protesta en cada una de las casillas impugnadas, en las que las personas representantes del partido **Hagamos** hubieran hecho patente que, como lo afirma en su escrito de

⁹ Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 108/2012 (10a.), de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, página 1326.



demanda, los votos comunes consignados en favor de dos o más integrantes de la coalición, no fueron distribuidos conforme a las reglas establecidas en la normativa aplicable.

También habría que explicar cómo fue que indebidamente el partido **Hagamos** apareciera con 0 cero votos a favor, en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas cuestionadas pues, con independencia de los votos que se le abonan en la distribución de los sufragios comunes, el acta de escrutinio y cómputo incluye en el apartado reservado a cada partido político, además de los sufragios obtenidos en la distribución de votos comunes, los votos obtenidos por sí solo, sin que en el caso concreto el partido actor plantee alguna irregularidad con motivo de que no se le reconozcan tampoco votos obtenidos por sí solo, y se tenga por acreditada alguna situación extraordinaria que amerite un tratamiento de similar naturaleza incluso a la luz de diversa causal de nulidad, como lo sería la denominada causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla.

Así, se insiste, ante el tribunal responsable únicamente se hizo la mención genérica de la supuesta irregularidad, y agregó las copias de las actas de cada una de las casillas impugnadas, lo que resultó insuficiente.

El partido, sostiene ante esta instancia, que la responsable tenía el deber de hacer un análisis contextual de las pruebas ya que ello constituye una metodología de análisis integral de hechos complejos que las autoridades jurisdiccionales deben considerar ante la posible dificultad probatoria derivada de situaciones de riesgo o afectación grave a los derechos político-electorales.

Su acreditación no requiere de un estándar estricto, sino de una valoración general de las circunstancias en las cuales se sitúan los hechos específicos base de la pretensión de las partes y que

permiten generar inferencias válidas sobre situaciones extraordinarias; así como flexibilizar o redistribuir cargas probatorias, atendiendo al riesgo razonable en la producción u obtención de los medios de prueba en tales circunstancias.

Sin embargo, para ello, es preciso que las partes presenten argumentos y elementos probatorios que, respetando las reglas del debido proceso y las características de los medios de impugnación, **permitan generar inferencias válidas tanto de los actos o conductas específicas como del nexo de éstas con el contexto que se alega**, dado que si bien el análisis contextual puede realizarse de oficio por el órgano jurisdiccional, en general, depende de la coherencia y consistencia narrativa de los planteamientos de las partes para su eficacia respecto a los hechos o irregularidades específicas que se pretenden demostrar, por lo que la mera afirmación de que un acto se inscribe en determinado contexto es insuficiente¹⁰, como en el caso acontece.

Pues, como ya se dijo, la parte actora únicamente hace la mención genérica de lo que a su juicio aconteció en cada casilla sin aportar mayores elementos ni precisiones más las que copias de las actas de escrutinio y cómputo, tal como concluyó el tribunal responsable.

Ahora bien, dado que el actor también solicitó al tribunal local flexibilizar las normas aplicables para la nulidad de casillas, concretamente en el error o dolo en el cómputo de los votos, dada la situación extraordinaria planteada (pretensión que también plantea ante esta autoridad jurisdiccional), en virtud de que **la presunta situación extraordinaria no quedó**

¹⁰ Criterio contenido en Tesis VII/2023, de rubro: PRUEBA DE CONTEXTO O ANÁLISIS CONTEXTUAL. NATURALEZA Y ALCANCE ANTE SITUACIONES COMPLEJAS QUE TENGAN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN LA MATERIA ELECTORAL. Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 16, Número 28, 2023, páginas 58, 59 y 60.



acreditada, es inconducente llevar a cabo el estudio bajo premisas no previstas expresamente en la ley de la materia, de ahí los calificativos de los agravios en estudio.

Agravios relativos a la pretensión de ordenar un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas cuestionadas, con la finalidad de conocer con exactitud los votos que fueron emitidos a favor del partido político Hagamos.

Los agravios se consideran **inoperantes** por las razones que enseguida se precisan.

Tal como quedó narrado en los antecedentes del presente medio de impugnación, durante la sustanciación del juicio local, el partido actor solicitó la apertura de paquetes electorales, con la finalidad de saber cuántos votos obtuvo el partido **Hagamos**, solicitud que fue negada por la responsable.

En contra de dicha determinación, la parte actora presentó un juicio de revisión constitucional electoral, mismo que, ya fue resuelto por esta Sala Regional, en el sentido de que no se actualizaban las hipótesis normativas para ordenar un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, por lo que, al haber existido un pronunciamiento previo sobre la misma materia planteada por la parte actora, resulta inviable que esta autoridad se pronuncie nuevamente en torno al mismo tema planteado.

Lo anterior, porque se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada al haber identidad en el sujeto, objeto y causa; la cosa juzgada tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, ¹¹ es por ello que, al haber un previo pronunciamiento en torno al tema, resulta inviable que se vuelva analizar, de ahí que se actualiza la inoperancia de los agravios expuestos.

Agravios relativos a la pretensión de ordenar la nulidad de la votación recibida en 125 casillas por violación a la cadena de custodia.

Dichos agravios devienen **inoperantes** porque si la parte actora en la instancia local pretendía hacer valer como irregularidad la alegada violación a la cadena de custodia de 125 paquetes electorales, su deber era señalar por lo menos los hechos concretos y argumentos a partir de los cuales desde su perspectiva habría ocurrido dicha irregularidad respecto de cada uno de los señalados paquetes.

En la anterior lógica, el que afirme en esta instancia que el Instituto Electoral local se encontraba vinculado a remitir al Tribunal local toda la documentación relacionada con el acto impugnado para que, del análisis de la misma, el Tribunal responsable pudiera concluir si se vulneró o no la cadena de custodia no lo releva de la obligación de ofrecer las pruebas tendentes a acreditar los hechos en que basaba respectivamente la supuesta violación a la cadena de custodia y pretensión de nulidad y a exponer los argumentos lógico jurídicos por los cuales en su concepto se habría actualizado la referida violación.

Al no hacerlo así, sus argumentos de agravio se tornan **inoperantes** por genéricos e imprecisos, pues sugiere que correspondía a las autoridades administrativa y local que le

¹¹ Jurisprudencia 12/2003. COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11.



relevaran de sus obligaciones procesales como parte actora en el juicio local.

Al haber concluido el estudio de los agravios y haber resultado inoperantes e infundados, esta Sala

RESUELVE

ÚNICO. Se **confirma** la sentencia impugnada.

Notifíquese en términos de ley. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, el Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, la Magistrada Gabriela del Valle Pérez, y el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado Omar Delgado Chávez, integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Secretaria General de Acuerdos Teresa Mejía Contreras, certifica la votación obtenida; asimismo, autoriza y da fe que la presente resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto, así como el transitorio segundo, del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral; y el Acuerdo General 2/2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se regula las sesiones de las salas del tribunal y el uso de herramientas digitales.